

This document was translated from English by machine and may contain mistakes. The English original is at <https://www.novaracg.com/2026/08/25/when-local-government-automates-an-accusation/>.

Cuando el gobierno local automatiza una acusación

Heather Grizzle · August 25, 2026

Una citación disputada de cámara de semáforo en rojo revela cómo la aplicación automatizada, los proveedores privados, los datos públicos y la débil rendición de cuentas crean riesgos de gobernanza local de la IA.

Contenidos

1. La observación se convirtió en atribución
2. La revisión humana puede haber sido más limitada de lo anunciado
3. La carga se transfirió al residente
4. La aplicación pública se canalizó a través de infraestructura privada
5. La responsabilidad se distribuyó lo suficiente como para desaparecer
6. Donde la detección se convierte en poder
7. Lo que la contratación debe gobernar

Lo que revela una citación disputada de una cámara de semáforo en rojo sobre la gobernanza de la IA, los proveedores privados, los datos públicos y la responsabilidad institucional

Novara Consulting Group | Gobernanza de la IA × Gobierno Local | Agosto de 2026

A resident opens an envelope from his city and finds an accusation inside: a photograph of an intersection, a timestamp, an enlarged image of a license plate, and a demand for payment. The vehicle is registered to him. He says he was miles away when the photograph was taken. The instinctive question, and the one around which most disputes of this kind are argued, is whether the camera worked. Was the plate read correctly, was the light truly red, was the equipment calibrated and certified. Those questions matter, and they are also the smallest questions available. Assume, for the



sake of the institution's best case, that the answer to every one of them is yes. Assume the camera performed exactly as designed and the process operated exactly as written. The governance problem survives intact, because the camera never observed the thing the citation asserts. It observed a vehicle. The citation accuses a person.

Un programa de aplicación automatizada no es una cámara. Es una cadena de inferencias. Un sensor observa un evento. Un software asocia el evento con un registro. Un proceso administrativo convierte la asociación en una acusación. La acusación inicia la aplicación de la ley contra una persona nombrada. Cada eslabón de esa cadena es una decisión que el gobierno ha tomado, ya sea que alguien dentro de la institución la experimente o no como una decisión, y un gobierno local no escapa de la responsabilidad de esas decisiones insertando un sistema automatizado y un contratista privado entre él mismo y el público. Cuando la tecnología observa un evento, lo asocia con un registro, genera una acusación e inicia la aplicación de la ley, cada inferencia de esa cadena debe estar gobernada. La cuestión no es simplemente si la cámara leyó con precisión una matrícula. Es si el gobierno puede justificar cómo la evidencia sobre un vehículo se convirtió en una acusación contra una persona.

Una citación de tránsito disputada es un caso pequeño con implicaciones pequeñas, lo cual es precisamente lo que la hace útil. A esta escala se puede examinar cada componente del sistema, y el patrón de fallo que el caso expone no es específico de las cámaras de tráfico. Es el patrón de fallo estándar de los sistemas de decisión automatizados desplegados por instituciones públicas. Cinco fallos merecen atención, y ninguno de ellos tiene que ver con la cámara.

La observación se convirtió en atribución

Según se informa, el sistema estableció que un vehículo entró en la intersección en contra de la señal. Si eso es exacto, es un logro probatorio genuino: un registro fotográfico con marca de tiempo de un evento, producido sin la presencia de un oficial. Pero el evento que el sistema registró no es la conducta que alega la citación. El sistema estableció lo que hizo un vehículo. No estableció nada sobre quién conducía. El proceso de aplicación de la ley trató la propiedad registrada como suficiente para iniciar una acusación, y al hacerlo convirtió un hecho sobre un objeto en una afirmación sobre una persona sin haber obtenido nunca la evidencia que esa conversión requiere.

That conversion is not a technical step. It is a legal and institutional one, and in most photo enforcement regimes it is accomplished by statute rather than by proof. Owner



liability rules exist because identifying drivers is difficult and citing owners is administratively easy, and legislatures in many states have made that trade deliberately, usually by defining the violation as civil and attaching liability to the registration record. A government may be entitled to make that trade. It is not entitled to make it invisibly. When a citation arrives styled as a finding about the recipient's conduct while the underlying record supports only a finding about the recipient's property, the institution has overstated its own evidence. This is a recurring failure across automated governance generally: systems produce facts about objects, records, and proxies, and institutions quietly promote those facts into claims about people.

La revisión humana puede haber sido más limitada de lo anunciado

Los programas de este tipo se defienden habitualmente con una frase que suena a gobernanza: un oficial revisa cada citación antes de emitirla. La frase merece una pregunta de seguimiento que rara vez recibe, que es qué, exactamente, revisa el oficial. Si la revisión consistió en confirmar que la matrícula en la fotografía coincide con el vehículo en la base de datos de registro, entonces el humano validó el único eslabón de la cadena que la máquina maneja mejor y dejó intacto el único eslabón que la máquina no puede abordar en absoluto, a saber, la identidad del conductor. La inferencia material, la inferencia de la que en realidad depende la responsabilidad, pasó por el proceso sin ser examinada por nadie.

"Human in the loop" is a governance claim, not a staffing description. It carries weight only when the human is positioned, authorized, and equipped to evaluate the inference that matters, and holds genuine discretion to stop the process when the evidence does not support it. A reviewer whose function is confined to confirming what the machine has already established is not performing oversight; the reviewer is performing ratification. Institutions that advertise human review owe the public a precise account of what the human examines, what the human is empowered to decline, and how often the reviewer actually declines. Where that account cannot be produced, the phrase is doing reassurance work that the process itself is not doing.

La carga se transfirió al residente

El tercer fallo se deriva de los dos primeros. Debido a que el sistema no pudo establecer quién conducía, y la revisión no lo intentó, el programa resolvió la cuestión de



identidad transfiriéndola. En lugar de que el gobierno estableciera quién cometió la infracción antes de formular una acusación, se exigió al propietario registrado que entrara en un proceso administrativo, aportara información y redirigiera la responsabilidad, en algunos regímenes identificando al conductor real y en otros documentando su propia ausencia. La posibilidad de impugnación existía, pero existía solo después de que el sistema ya hubiera actuado, y la consecuencia predeterminada de no hacer nada era la responsabilidad. La secuencia importa. Una acusación que debe ser activamente desmontada es un ejercicio de poder diferente al de una acusación que primero debe probarse.

Courts have recognized this structure before. In *State v. Kuhlman* (Minn. 2007), the Minnesota Supreme Court invalidated Minneapolis's photo enforcement ordinance, holding that it conflicted with the state's uniform traffic laws and reasoning that its presumption that the registered owner was the driver eliminated the presumption of innocence and shifted the burden of proof onto the accused. The lesson of that decision is not that automated enforcement is inherently unlawful. It is that burden allocation is a governance decision of the first order. Deciding who must prove what, at what cost, on what timeline, and with what consequence for silence is a decision about the relationship between the state and the people it governs. It cannot be inherited by default from a vendor's workflow, and residents should not discover how it was made for the first time when the envelope arrives.

La aplicación pública se canalizó a través de infraestructura privada

Every element of the accusation resides somewhere, and in a vendor-operated program much of it may reside outside the government. Images, plate reads, timestamps, registration lookups, violation records, payment data, and the contents of residents' challenges may pass through, or be stored on, systems the contractor builds and controls. The public is entitled to precise answers to unglamorous questions: who can access the information and under what authorization; where it is stored and under which jurisdiction's law; how long it is retained, and whether retention tracks the disposition of the citation or the convenience of the vendor; whether it may be reused, aggregated, analyzed, or sold in any form; and what becomes of it when the contract ends, when the vendor is acquired, or when the vendor fails. A resident cannot opt out of being photographed by an enforcement program at a public intersection. Data ge-



nerated under that kind of compelled exposure is an artifact of public authority, and its governance cannot default to the terms of a commercial agreement the public has never seen.

These are not hypothetical anxieties in this particular market. Photo enforcement has a documented history of misaligned incentives, including compensation structures that paid contractors per citation issued, and of procurement corruption, most prominently the bribery scheme surrounding Chicago's red-light program, which produced federal convictions. Texas responded to years of controversy by banning red-light cameras statewide in 2019. None of this establishes that vendors are bad actors. It establishes that vendors are vendors: private firms with commercial incentives, operating inside a function that is supposed to answer to entirely different incentives. That is a condition to be governed rather than an accusation to be litigated, and it is governable only in the contract.

La responsabilidad se distribuyó lo suficiente como para desaparecer

Pregunte quién es responsable de la acusación y el programa responde en fragmentos. La cámara detectó el evento. El proveedor operó el sistema. Un oficial verificó la matrícula. La ciudad autorizó el programa. La ley estatal estructuró la citación. Cada participante puede informar con veracidad que su propia función limitada funcionó según lo diseñado, y cada uno tiene razón dentro de su propio límite. Sin embargo, los resultados de esas funciones se combinaron en una acusación gubernamental contra una persona específica que dice que estaba a kilómetros de distancia, y ningún participante individual es dueño del acto compuesto.

Este es el mecanismo silencioso mediante el cual la automatización disuelve la responsabilidad, no a través de la mala fe o el mal funcionamiento, sino a través de la descomposición. La responsabilidad se divide en componentes hasta que no existe en ningún lugar en particular. La gobernanza existe para prevenir precisamente este resultado. En algún lugar de la institución debe haber una oficina, ocupada por una persona con nombre propio, que sea responsable de las afirmaciones que el sistema hace sobre los miembros del público, facultada para responder por esas afirmaciones y obligada a corregirlas. Si nadie dentro del programa puede decir que la acusación fue suya, el gobierno ha construido una máquina para producir acusaciones que nadie está dispuesto a asumir.



Donde la detección se convierte en poder

El sistema puede haber identificado con precisión un vehículo mientras la institución atribuía de manera inexacta una conducta a una persona. Eso no es simplemente una distinción técnica. Es el punto en el que la detección automatizada se convierte en poder gubernamental. Casi todo lo que los procesos de contratación evalúan actualmente reside en el lado de la detección de esa línea: la precisión del equipo, las certificaciones del proveedor, los calendarios de calibración, los compromisos de tiempo de actividad, el precio unitario. Casi todo lo que importa institucionalmente reside en el lado de la atribución: lo que la evidencia puede respaldar, qué inferencias se permite el gobierno extraer del resultado de la máquina, quién soporta la carga cuando se impugna una inferencia y quién responde cuando está equivocada. Una contratación que escudriña la cámara y da por sentada la acusación ha evaluado el producto e ignorado el poder.

None of this turns on whether the components involved qualify as artificial intelligence. Plate recognition is machine vision; much of the rest may be ordinary software and administrative workflow. The governance obligation attaches to the inference chain, not to the sophistication of the code, which is why the pattern generalizes. The same chain, observation to association to allegation to enforcement, sits inside gunshot detection, benefits fraud detection, automated license suspension, and every comparable system a local government buys. Michigan's automated unemployment insurance system, which falsely accused tens of thousands of residents of fraud before audits and litigation caught up with it, was this same architecture operating at catastrophic scale. The red-light camera is simply the version small enough to see whole.

Lo que la contratación debe gobernar

Los gobiernos locales no están simplemente comprando cámaras, algoritmos o plataformas administrativas. Están comprando sistemas que participan en la autoridad pública, y la contratación es donde esa participación se define. También es el último momento en el que el gobierno tiene pleno poder de negociación. Antes de la firma, todos los términos están disponibles. Después del despliegue, la gobernanza se convierte en remediación.

La contratación debe, por lo tanto, gobernar algo más que el rendimiento y el precio. Debe gobernar la evidencia, exigiendo que el contrato y la propia citación establezcan



con precisión lo que el sistema puede y no puede acreditar. Debe gobernar la inferencia, especificando qué conversiones de resultado de máquina a afirmación legal están permitidas y quién autoriza cada una. Debe gobernar los datos, resolviendo la custodia, el acceso, la conservación, la reutilización, la seguridad y la salida antes de que se capture la primera imagen. Debe gobernar la revisión humana, definiendo lo que el revisor debe determinar de manera independiente y otorgándole autoridad real para detener la emisión. Debe gobernar la impugnabilidad, dando cuenta honestamente de la carga que el programa impone a los residentes y defendiendo públicamente esa asignación. Debe gobernar los incentivos del proveedor, desvinculando la compensación del volumen de aplicación de la ley. Y debe gobernar la responsabilidad, nombrando a la oficina que responde por lo que el sistema hace a las personas a las que afecta.

None of this is utopian, because some of it is already law. When Minnesota returned to automated enforcement in 2024, nearly two decades after Kuhlman, it did so through state legislation authorizing a narrowly conditioned four-year pilot rather than through local ordinance. The statute requires a warning for a first violation, mandates advance signage and published camera locations, requires independent evaluation and reports to the legislature, prohibits paying private contractors based on the number of violations or citations issued, and requires the implementing government to audit its vendor's data practices. Whatever one concludes about the wisdom of the program, the instrument is instructive. The difference between the ordinance the Minnesota Supreme Court struck down and the pilot the legislature authorized is not the camera. It is the governance written around the camera, before deployment, in enforceable terms. That is the discipline Novara Consulting Group practices as Operational AI Governance™: converting governance principles into instruments a procurement office can actually execute while the government still holds the pen.

Un gobierno puede externalizar la tecnología. No puede externalizar su obligación de justificar lo que esa tecnología le hace al público.

Cómo citar

Grizzle, H. M. (2026, August 25). Cuando el gobierno local automatiza una acusación. Novara Consulting Group. <https://www.novaracg.com/es/2026/08/25/when-local-government-automates-an-accusation/>

